

APORTES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A LA JURISPRUDENCIA DE LA TIERRA

CONTRIBUTIONS OF THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS TO JURISPRUDENCE OF THE EARTH

MAYRA CABRAL BREA

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Cátedra UASD-UNESCO: Cultura de Paz, Derechos Humanos y Democracia

Recibido: 17/08/2020

Aceptado: 09/09/2020

Resumen: El presente artículo estudia los principales fundamentos teóricos y antecedentes históricos del reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al medio ambiente y los recursos naturales. La autora analiza los aportes de la referida Corte a la Jurisprudencia de la Tierra a partir del cambio de enfoque antropocéntrico propuesto en su opinión consultiva núm. 23 de 2017 y sugiere el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza mediante la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en aras de impulsar en la región la consiguiente inmediata protección simultánea y armónica de los derechos fundamentales de la Naturaleza y de las personas al medio ambiente.

Palabras claves: derechos de la Naturaleza, Jurisprudencia de la Tierra, Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-23/17.

Abstract: *This article studies the main theoretical and historical antecedents of the recognition of the rights of Nature and the jurisprudential line developed by the Inter-American Court of Human Rights in relation to the environment and natural resources. The author analyzes the contributions of the aforementioned Court to the Jurisprudence of the Earth from the change of anthropocentric approach proposed in its advisory opinion no. 23 of 2017 and suggests the recognition of the rights of Nature through the interpretation of Article 26 of the American Convention on Human Rights in order to promote in the region the immediate simultaneous and harmonious protection of the fundamental rights of Nature and people's rights to a healthy environment.*

Keywords: *Rights of Nature, Jurisprudence of the Earth, Inter-American Court of Human Rights, OC-23/17.*

SUMARIO: 1. PRINCIPALES ANTECEDENTES TEÓRICOS E HISTÓRICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. 2. EL ENFOQUE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PREVIO A LA OC-23/17. 3. HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE IDH. 4. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA.

1. PRINCIPALES ANTECEDENTES TEÓRICOS E HISTÓRICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

La reflexión política, académica y jurídica sobre las consecuencias del calentamiento global, del cambio climático, de la acidificación de los océanos, de la contaminación ambiental, de la pérdida de la biodiversidad, de la deforestación y de la desertificación, entre otros problemas que amenazan la sobrevivencia de todas las especies, ha promovido un gran desarrollo teórico y normativo que persigue salvaguardar la Naturaleza desde otros paradigmas. Cada vez se defiende y se avanza más en la protección de la Naturaleza a través de su reconocimiento como sujeto de derechos y se transita de un modelo de desarrollo antropocéntrico a uno con una visión ecocéntrica¹.

Según Zaffaroni la tipificación del delito de maltrato y crueldad animal constituye un hito fundamental para el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza porque convirtió a los animales en bienes jurídicos protegibles por sí mismos, en este caso, en sujetos del derecho a no ser maltratados por los humanos. Apunta, que en 1824 se fundó en Inglaterra *The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals*, la cual consiguió que se procesaran sesenta y tres infractores. A partir de esta experiencia las sociedades para la prevención de la crueldad a animales y las legislaciones que penalizan dicho delito se extendieron por el mundo anglosajón y más tarde al resto de los países².

Ahora bien, la doctrina coincide en considerar a Christopher Stone el principal precursor de los derechos de la Naturaleza³ por su artículo titulado *¿Deben los árboles tener pies? Hacia un reconocimiento de los derechos legales de los objetos naturales*, publicado en 1972 en una revista jurídica de California. Stone señaló que a lo largo del tiempo se ha aceptado como sujetos de derechos a personas y seres cuya titularidad resultaba inconcebible. Sostuvo que el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Naturaleza permitiría llevar acciones judiciales en nombre de árboles, de otros elementos naturales y del medio ambiente como unidad y reclamar indemnizaciones por los daños provocados a estos, las cuales podrían utilizarse para su propia protección o reparación⁴.

¹ ANAYA, J., CASTAÑEDA, Y. y REYES, A., “El derecho al desarrollo y los derechos de la Naturaleza”, *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas* (UNIFAFIBE), vol. 8, n.º 2, 2020, pp. 604 y 617.

² ZAFFARONI, E., *La Pachamama y el humano*, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2011, p. 46.

³ ANAYA, J., CASTAÑEDA, Y. y REYES, A., “El derecho al desarrollo y los derechos de la Naturaleza”, cit., p. 622; BELLOSO MARTÍN, N., *El debate sobre la tutela institucional: Generaciones futuras y derechos de la Naturaleza*, Universidad de Alcalá-Defensor del Pueblo, Alcalá de Henares (Madrid), 2018, pp. 175 y ss.; MORATO LEITE, J. y FRANÇA DINNEBIER, F., “Derechos de la Naturaleza: Fundamentos y protección por el Estado ecológico de Derecho en América Latina”, en PEÑA CHACÓN, M. (ed.), *Derecho ambiental del siglo XXI*, ISOLMA, San José, 2019, p. 109; BEDÓN, R. y SUÁREZ, S., “Derechos de la Naturaleza en Ecuador y otras tendencias a nivel internacional”, *CÁLAMO Revista de Estudios Jurídicos*, n.º 11, 2019, p. 7.

⁴ STONE, C., “¿Los árboles deberían tener legitimidad procesal? Hacia un reconocimiento de los derechos legales de los objetos naturales”, trad. de C. Morales, en HARDIN, G., ROSE, C. y STONE, C., *Derecho Ambiental y Justicia Social*, Siglo de Editores, Bogotá, 2009.

Otro autor importante en la década de los 70 es Passmore, quien en 1978 publicó la obra *La responsabilidad del hombre frente a la Naturaleza* en la que identificó las diferencias entre un enfoque antropocéntrico y uno biocéntrico en cuanto a la relación del ser humano y la Naturaleza⁵. En 1982 la Asamblea General de las Naciones Unidas da un pequeño paso hacia el enfoque biocéntrico al aprobar, aunque sin fuerza vinculante, la Carta Mundial de la Naturaleza que establece que la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales y que toda forma de vida es única, tiene valor intrínseco y merece ser respetada, independientemente de su utilidad para el ser humano⁶.

Desde 1984 Stutzin planteó que el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza constituye un imperativo o *conditio sine qua non* para estructurar un auténtico Derecho ecológico capaz de detener el apresurado proceso de destrucción de la biosfera, antes que resulte inútil todo esfuerzo jurídico destinado a ello. Para el autor, al hacer valer los derechos de la Naturaleza, el Derecho ecológico tiene mejores posibilidades de lograr la adecuada apreciación y suficiente reparación de los daños que se inflijan al mundo natural. Advirtió, que mientras la Naturaleza siga siendo meramente un bien jurídico, estará subordinada a los intereses utilitarios del hombre y su valor se medirá a partir de estos intereses, dependientes de las tendencias propias de la tecnósfera⁷.

En 1988 Thomas Berry publicó un trabajo titulado *El sueño de la Tierra* en el cual insistió en la necesidad de una jurisprudencia que establezca los derechos de los componentes geológicos, biológicos y humanos de la comunidad de la Tierra. Para Berry se debería dotar al hábitat de todas las especies de la condición jurídica de sagrado e inviolable⁸. Aportó a la fundamentación de lo que se denominaría luego la *Jurisprudencia de la Tierra* cuyo objetivo es proveer una herramienta para ayudar a crear y mantener un sistema de justicia que reconoce, honra y protege los derechos del planeta Tierra como una realidad viva, así como los derechos de todas sus especies a existir y cumplir destinos mutuos de autosuficiencia⁹. En esa misma línea, Roderick Nash con su obra publicada un año después bajo el nombre *Los derechos de la Naturaleza: Una historia de Ética Medioambiental* contribuyó también al proceso de sensibilización respecto de la importancia del reconocimiento

⁵ PASSMORE, J., *La responsabilidad del hombre frente a la naturaleza*, trad. de A. Delgado, Alianza Editorial, Madrid, 1990.

⁶ Organización de las Naciones Unidas, *Carta Mundial de la Naturaleza*, Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, Resolución 37/7, 28 de octubre de 1982.

⁷ STUTZIN, G., “Un imperativo ecológico: Reconocer los derechos de la Naturaleza”, *Ambiente y Desarrollo*, n.º 1, 1984, pp. 97 y ss.

⁸ BERRY, T., *The dream of the Earth*, Sierra Club, San Francisco, 1988. Sobre este punto véase BELLOSO MARTÍN, N., *El debate sobre la tutela institucional: Generaciones futuras y derechos de la Naturaleza*, cit., p. 177.

⁹ BERRY, T., *The dream of the Earth*, cit. Sobre este punto véase MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamentos para el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos”, en ESTUPIÑAN ACHURY, L., STORINI, C., MARTÍNEZ DALMAU, R. y DE CARVALHO DANTAS, F. (ed.), *La naturaleza como sujeto de Derechos en el Constitucionalismo Democrático*, Universidad Libre, Bogotá, 2019.

de la Naturaleza como sujeto titular de derechos para la evolución de los derechos fundamentales¹⁰.

El primer lugar en el mundo que aprobó una ley para los derechos de la Naturaleza fue la municipalidad de Tamaqua, Condado de Schuylkill, Pennsylvania, Estados Unidos en el año 2006. En el caso de América Latina, gran parte de los conflictos socioambientales han sido provocados por los proyectos extractivistas, las explotaciones forestales, la construcción de infraestructura, entre otros, caracterizados por la sobreexplotación de la Naturaleza, destrucción de la biodiversidad, prácticas de despojo de tierras y territorios de comunidades y pueblos indígenas, desplazamientos forzados de población, criminalización de líderes comunitarios y defensores ambientalistas¹¹. De ahí que, desde la región se reivindicaran los derechos de la Naturaleza, especialmente, a partir de la cosmovisión y la relación que establecen con ésta los pueblos originarios¹².

Ecuador se convirtió en el primer país en dotar de personalidad jurídica a la Naturaleza y reconocerla como sujeto de derechos en su Constitución de 2008, marcando un hito trascendental para toda América Latina y el mundo. Bolivia, si bien no incorporó expresamente en su Constitución de 2009 los derechos de la Naturaleza, consagró en ella principios y disposiciones importantes para su salvaguarda, en diciembre de 2010 aprobó la Ley núm. 71 de Derechos de la Madre Tierra y en octubre de 2012 la Ley núm. 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Los mencionados instrumentos promueven la perspectiva ecocéntrica del Derecho y la construcción de saberes desde los pueblos originarios¹³ que aportaron la idea de un sistema respetuoso y armónico en relación con la Naturaleza denominado *sumak kawsay* o buen vivir¹⁴.

¹⁰ NASH, R., *The Rights of Nature: A History of Environmental Ethics*, The University of Wisconsin Press, Madison, 1989.

¹¹ ANAYA, J., CASTAÑEDA, Y. y REYES, A., “El derecho al desarrollo y los derechos de la Naturaleza”, *cit.*, p. 617. Sobre este punto véase también GUZMÁN, J., “Decolonizing Law and Expanding Human Rights: Indigenous Conceptions and the Rights of Nature in Ecuador”. *Deusto Journal of Human Rights*, n.º 4, 2019, p. 71.

¹² La antigua civilización Inca le llamaba *Pachamama* que significa “Madre Tierra” por considerarla la deidad protectora, generadora y propiciadora de la vida y que, sin ella, ésta no sería posible. Sobre este punto véase MORATO LEITE, J. y FRANÇA DINNEBIER, F., “Derechos de la naturaleza: Fundamentos y protección por el Estado ecológico de Derecho en América Latina”, *cit.*, p. 102; ZAFFARONI, E., “La naturaleza como persona: de la Pachamama a la Gaia”, en ESPINOSA GALLEGOS-ANDA, C. y PÉREZ FERNÁNDEZ, C. (eds.), *Los derechos de la Naturaleza y la naturaleza de sus derechos*, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Quito, 2011, p. 22.

¹³ ANAYA, J., CASTAÑEDA, Y. y REYES, A., “El derecho al desarrollo y los derechos de la Naturaleza”, *cit.*, pp. 621 y ss.

¹⁴ El *sumak kawsay* es un sistema de vida, un conjunto de principios, normas o reglas que condicionan el modelo económico, social y político de la sociedad. En este sistema la forma de organización social básica es la comunidad donde el ser humano como individuo no existe, sino que se encuentra integrado a la comunidad y a la *Pachamama*. En lo político, las instituciones y autoridades garantizan una vida armónica y libre de la explotación y apropiación de la Naturaleza. Y en cuanto al modelo económico se parte de la concepción de que todo es parte de la Naturaleza

En 2014 la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza impulsa la creación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza cuya misión consiste en investigar y dictaminar sobre cualquier violación de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, sean estas cometidas por Estados, personas jurídicas o individuos. También el Tribunal puede mediar, emitir opiniones consultivas y dictar medidas provisionales, entre otras. Esta iniciativa creada por la sociedad civil si bien emite sentencias que no son vinculantes, ha proporcionado fundamentos jurídicos importantes para avanzar en la Jurisprudencia de la Tierra. Ha celebrado cinco tribunales: Quito (2014), Lima (2014), París (2016), Bonn (2017) y Santiago de Chile (2019)¹⁵.

Otros importantes avances en la jurisprudencia, doctrina y en la legislación a nivel mundial se han registrado en los últimos siete años¹⁶. Los instrumentos jurídicos y sentencias que reconocen derechos de la Naturaleza se caracterizan por: a) Involucrar a las comunidades en las soluciones de las problemáticas; b) descosificar a la biodiversidad y los ecosistemas; d) interpretar dinámicamente el Derecho ambiental internacional (tanto el *soft law* como el *hard law*) y el Derecho interno; e) reconocer normas bioculturales; f) ordenar la restauración de la Naturaleza a su situación original¹⁷; g) priorizar más medidas preventivas que patológicas, etc.¹⁸. Los derechos de la Naturaleza no suponen que la misma sea intocada ni que prohíba, por ejemplo, la pesca, la ganadería y los cultivos. Lo que defienden es el mantenimiento saludable

o *Pacha* y la misma no se puede utilizar con fines mercantilistas sino únicamente para satisfacer las necesidades vitales, para de esta forma evitar el desequilibrio de la Naturaleza. De ahí que sea incompatible el sistema económico capitalista que proyecta al hombre como amo y señor de la Naturaleza (LLASAG FERNÁNDEZ, R., “Derechos de la naturaleza: una mirada desde la filosofía indígena y la Constitución”, en ESPINOSA GALLEGOS-ANDA, C. y PÉREZ FERNÁNDEZ, C. (eds.), *Los derechos de la Naturaleza y la naturaleza de sus derechos*, cit., pp. 82 y ss.).

¹⁵ MARTÍNEZ, A. y PORCELLI, A., “Sistematización de las sentencias del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza en defensa del Ecosistema Natural”, *POSICIÓN*, n.º 3, 2020, p. 3.

¹⁶ Por mencionar algunos, México consagró los derechos de la Naturaleza en la Ciudad de México en 2013 mediante la ley de Protección a la Tierra, en la Constitución del Estado de Guerrero de 2014, en la Constitución de la Ciudad de México de 2017, y en la Constitución del Estado de Colima de 2019. La Organización de las Naciones Unidas mediante resolución 70/1 del 25 de septiembre de 2015 aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuyo Objetivo 12 es “asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la Naturaleza”. Colombia reconoció la personalidad jurídica del río Atrato (Sentencia T-622/16 de la Corte Constitucional del 10 de noviembre de 2016) y de la Amazonía (Sentencia STC 4360-2018 de la Corte Suprema de Justicia. En esta sentencia se reconoció la necesidad de tutelar los derechos de las generaciones futuras en materia climática y se instruye para la construcción de un Pacto Intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano, esto con el propósito de reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero); Nueva Zelanda del río Whanganui (2017) y Australia del río Yarra (2017).

¹⁷ BELLOSO MARTÍN, N., *El debate sobre la tutela institucional: Generaciones futuras y derechos de la Naturaleza*, cit., pp. 166 y 213.

¹⁸ GONZÁLEZ BALLAR, R., “El Derecho ambiental del siglo XXI: Reflexiones para reformas necesarias”, en PEÑA CHACÓN, M. (ed.), *Derecho ambiental del siglo XXI*, cit., p. 17.

de los sistemas, ciclos y conjuntos de vida¹⁹, cambiando la forma en que los seres humanos se relacionan con ella²⁰.

2. EL ENFOQUE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PREVIO A LA OC-23/17

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) ha protegido, en más de doce ocasiones, los recursos naturales y el medio ambiente a través de una interpretación evolutiva de los derechos de propiedad de los miembros de las comunidades indígenas –artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH)– y tomando en cuenta el artículo 29.b de dicho tratado –que prohíbe la interpretación restrictiva de los derechos–.

El primer caso fue el de la *Comunidad Mayagna* relacionado con la falta de demarcación, delimitación y titulación del territorio ancestral de la comunidad, frente a afectaciones por concesión de explotación maderera a una empresa privada en su territorio²¹. En dicho caso, la Corte IDH señaló que la relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica y, en consecuencia, ordenó al Estado delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, abstenerse de realizar actos que puedan afectar los bienes ubicados en dicha zona y pagar indemnizaciones²².

Igualmente, en dos casos contra Paraguay (*Yakye Axa* y *Sawhoyamaxa*), relativos a comunidades despojadas de su territorio ancestral por la privatización del chaco paraguayo a mediados del siglo XIX y la ocupación de sus tierras para la explotación ganadera, la Corte estableció que los pueblos indígenas tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio y que, sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo²³.

¹⁹ MARTÍNEZ, E. y ACOSTA, A., “Los derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible”, *Revista Direito e Práxis*, vol. 08, n.º 4, 2017, p. 2943.

²⁰ BELLOSO MARTÍN, N., *El debate sobre la tutela institucional: Generaciones futuras y derechos de la Naturaleza*, cit., p. 226.

²¹ CALDERÓN GAMBOA, J., “Medio ambiente frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Una ventana de protección”, en CANÇADO TRINDADE, A. y BARROS LEAL, C. (coords.), *Derechos humanos y Medio Ambiente*, Expressão Gráfica e Editora, Fortaleza, 2017, p. 111.

²² Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia n.º 79, Serie C de 31 de agosto de 2001.

²³ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa contra Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia n.º 125, Serie C de 17 de junio de 2005; *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia n.º 146, Serie C de 29 de marzo de 2006.

La Corte IDH continua el desarrollo de esta línea jurisprudencial en casos que surgen a raíz de que el Estado otorgó concesiones mineras y madereras en territorio de pueblos y comunidades indígenas, causando daños a la propiedad colectiva y a los recursos naturales de estos. Así, en el *Caso del Pueblo de Saramaka*²⁴ y de la *Comunidad Indígena Xákmok Kásek*²⁵ se explica el deber del Estado de asegurar la participación efectiva de los miembros de la comunidad, en relación con todo plan o decisión que afecte sus tierras tradicionales o que pueda restringirles el uso, goce y disfrute de dichas tierras, de realizar estudios de impacto ambiental y social previo a los proyectos de esta naturaleza y de compartir los beneficios obtenidos con la comunidad o de indemnizar.

La Corte IDH puntualizó que la identidad cultural de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural. El derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido si dicho derecho no estuviera conectado con los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio²⁶. Es por ello que vinculó además la afectación al derecho a la *vida digna* con la falta de sus tierras, por la ausencia de posibilidades de autoabastecimiento y auto-sostenibilidad de los miembros de las comunidades²⁷.

Otro importante caso es el decidido el 27 de junio de 2012 contra Ecuador por el Estado haber permitido que una empresa privada realizara actividades de exploración petrolera, amenazando gravemente los derechos a la vida e integridad personal, en relación con la obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal, en perjuicio de los miembros del Pueblo Sarayaku²⁸. La Corte IDH al decidirlo admitió que las detonaciones de explosivos del proyecto destruyeron partes de los bosques, fuentes de agua, cuevas, ríos subterráneos y que causaron la migración de los animales, pero no le reconoció valor propio a la Naturaleza ni ordenó medidas efectivas para su restauración como se establece en la Constitución de Ecuador de 2008. Apenas ordenó neutralizar, desactivar y retirar la pentolita en superficie y enterrada por el proyecto en el territorio del Pueblo Sarayakula y reforestar las áreas afectadas por el proyecto.

²⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso del Pueblo Saramaka contra Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 172, Serie C de 28 de noviembre de 2007, párrs. 122 y ss.

²⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek contra Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 214, Serie C de 24 de agosto de 2010.

²⁶ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso del Pueblo Saramaka contra Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, cit.

²⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek contra Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*, cit.

²⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador. Fondo y Reparaciones*, Sentencia n.º 245, Serie C de 27 de junio de 2012.

Los daños a la Naturaleza han sido generalmente reconocidos en la jurisprudencia de la Corte IDH por su afectación para la supervivencia y vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes, no por su valor intrínseco. De ahí que, entre las reparaciones ordenadas en los casos citados y en los que posteriormente va decidiendo la Corte, algunas si bien muy progresistas²⁹, están basadas en los intereses humanos³⁰ y no consagran medidas efectivas para la restauración³¹ de la Naturaleza.

El 25 de noviembre de 2015 se observa un pequeño avance en la jurisprudencia de la Corte IDH al decidir el caso de los *Pueblos Kaliña y Lokono contra Surinam* el cual versa respecto de la reivindicación del territorio tradicional de estos pueblos dentro de áreas declaradas protegidas por el Estado, utilizadas también en un proyecto minero. En ese orden, la Corte aclaró que un área protegida, consiste no solamente en la dimensión biológica sino también en la sociocultural y que, por tanto, incorpora un enfoque interdisciplinario y participativo. Además, que en principio, existe una compatibilidad entre las áreas naturales protegidas y el derecho de los pueblos indígenas y tribales en la protección de los recursos naturales sobre sus territorios, pues por su interrelación con la naturaleza y formas de vida, pueden contribuir a su conservación³².

²⁹ Se ha ordenado delimitar, demarcar y otorgar títulos de propiedad colectiva de las tierras ancestrales a favor de las comunidades; implementar medidas y mecanismos adecuados a fin de minimizar el perjuicio de los proyectos en la capacidad de supervivencia de los pueblos indígenas; crear fondos de desarrollo comunitario para proyectos educativos, culturales, de desarrollo ecoturístico, de vivienda, agrícolas y sanitarios; proporcionar electricidad y agua potable; brindar atención médica y psicosocial de todos los miembros de la comunidad; entregar alimentos; instalar servicios sanitarios adecuados; dotar de materiales y recursos a escuelas; hacer mejoras en el sistema de vías de comunicación públicas; construir un centro para adultos mayores; pagar indemnizaciones; consultar de manera previa y efectiva a las comunidades en los casos en que se pretenda realizar actividad o proyectos de desarrollo que implique potenciales afectaciones en su territorio y adoptar medidas que así lo garanticen, etc. Sobre este punto véase las reparaciones ordenadas en los casos: Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso del Pueblo Saramaka contra Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, cit.; *Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek contra Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*, cit.; *Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador. Fondo y Reparaciones*, cit.; *Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) contra Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 270, Serie C de 20 de noviembre de 2013; *Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros contra Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 304, Serie C de 8 de octubre de 2015.

³⁰ GUZMÁN, J., “Decolonizing Law and Expanding Human Rights: Indigenous Conceptions and the Rights of Nature in Ecuador”, cit., p 78.

³¹ La restauración consistiría en la devolución, en la medida de lo posible, al suelo, aire y agua, a la fauna, flora y a las condiciones ambientales de desarrollo de las especies, de las propiedades que se hubiesen perdido o alterado, de tal forma que los recursos deteriorados y el sistema ecológico recuperen su funcionalidad alterada. Se trata de un derecho propio de la Naturaleza, y es independiente del derecho a indemnizaciones y compensaciones que les corresponde a las personas o colectivos (BEDÓN, R. y SUÁREZ, S., “Derechos de la Naturaleza en Ecuador y otras tendencias a nivel internacional”, cit., pp. 10 y 17).

³² Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Pueblos Kaliña y Lokono contra Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 309, Serie C de 25 de noviembre de 2015.

En el referido caso, la Corte IDH estableció que la extracción de bauxita generó graves daños al medio ambiente y a los recursos naturales necesarios para la subsistencia y desarrollo de los Pueblos Kaliña y Lokono. Describió cómo el ruido de la construcción y las explosiones regulares de dinamita provocaron que los animales y aves se alejaran perjudicando con ello la caza; los riachuelos se contaminaron afectando con ello la pesca; la tala de árboles y el suelo se vio afectado y muchas plantas tradicionales dejaron de crecer. Asimismo, la Corte reconoció que se derivaron otros daños con motivo de la construcción de la carretera para el transporte de la bauxita y mediante su diligencia *in situ*, constató los daños y la transformación radical del paisaje. En consecuencia, en las reparaciones ordenó rehabilitar la zona afectada en la Reserva por las actividades mineras, incluyendo las medidas de reforestación, entre otras³³.

3. HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE IDH

Actualmente, la Corte IDH cuenta con adecuadas herramientas para el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. Como refirió en el *Caso Acevedo Buendía y otros contra Perú*, al igual que cualquier órgano con funciones jurisdiccionales, “tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia (compétence de la compétence)”, pues todo Estado que haya reconocido la competencia contenciosa de la Corte, presupone la admisión del derecho de ésta de resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción³⁴.

Si bien el artículo 1 numeral 2 de la CADH establece que, para los efectos de la Convención, persona es todo ser humano, esto no ha constituido una limitante para la Corte IDH reconocer violaciones de los derechos consagrados en dicho instrumento respecto de personas jurídicas. En efecto, ha reconocido las comunidades indígenas y pueblos tribales como titulares de derechos protegidos por el sistema interamericano y ha admitido que pueden presentarse ante el mismo en defensa de sus derechos y los de sus miembros, por encontrarse en una situación particular y disponerse así en varios instrumentos jurídicos internacionales, de los que son partes los Estados del sistema interamericano, y en algunas de sus legislaciones nacionales³⁵. Igualmente, la Corte ha reconocido la titularidad de los sindicatos, federaciones y confederaciones con relación a los derechos establecidos en el artículo 8.1.a del Protocolo de San Salvador, lo cual les permite presentarse ante el sistema interamericano en defensa de dichos derechos³⁶.

³³ *Ibid.*

³⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Acevedo Buendía y otros* (“*Cesantes y Jubilados de la Contraloría*”) *contra Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 198, Serie C de 1 de julio de 2009.

³⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016, Serie A.

³⁶ *Ibid.*

Por otro lado, en la opinión consultiva de 2017 formulada por el Estado de Colombia la Corte IDH determinó las principales obligaciones estatales para la protección del medio ambiente³⁷. Aclaró allí que en el sistema interamericano de derechos humanos, el derecho a un medio ambiente sano se encuentra consagrado expresamente en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, y que adicionalmente, debe considerarse incluido entre los derechos económicos, sociales y culturales protegidos por el art. 26 de la CADH³⁸. Se establece también que existe una relación de interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y que todos los derechos humanos deben ser entendidos integralmente, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello³⁹.

Además de los aspectos señalados, la importancia de la opinión consultiva núm. 23 reside en el cambio de paradigma que promueve al alejarse considerablemente de la concepción antropocéntrica, para dar un giro hacia una concepción biocéntrica, cuando explica la tendencia del Derecho hacia el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y su personería jurídica⁴⁰, en los siguientes términos:

62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medioambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia

³⁷ Entre las obligaciones de los Estados respecto al medio ambiente, en la opinión consultiva se enumeran: a) Respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, aunque no estén dentro de su territorio; b) evitar causar daños transfronterizos; c) prevenir daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, para lo cual deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente; d) realizar estudios de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo al medio ambiente; e) establecer un plan de contingencia para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales; f) mitigar el daño ambiental significativo que hubiere producido; g) actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica; h) cooperar, de buena fe, para la protección contra daños transfronterizos significativos al medio ambiente; i) garantizar el derecho al acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente, el derecho a la participación pública en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, así como el derecho de acceso a la justicia en la materia.

³⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Medio ambiente y derechos humanos*, Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, Serie A.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ BAUTISTA LÓPEZ, J., “Discriminación ambiental, la negación del principio de igualdad en el ejercicio del derecho al medio ambiente”, *Revista Argumentos*, n.º 8, 2019, p. 40.

*a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales*⁴¹.

Se resalta seguidamente, que el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal. Que los daños ambientales pueden afectar todos los derechos humanos, por depender estos de un medio propicio y que determinados grupos como los pueblos indígenas, los niños y niñas, las personas viviendo en situación de extrema pobreza, las minorías, las mujeres, las personas con discapacidad, las comunidades que dependen fundamentalmente de los recursos ambientales, entre otros, sufren en mayor intensidad dichos daños⁴².

Cabe destacar, que las opiniones consultivas tienen un carácter no solo vinculante, sino, además, *erga omnes*, puesto que, al ser la Corte IDH el intérprete último y auténtico de la CADH, sus interpretaciones sobre el *corpus iuris* de los derechos humanos deben ser acatadas por todos los Estados integrantes de la Organización de Estados Americanos⁴³. Y es que como viene señalando desde 2006 la Corte IDH con el *Caso Almonacid Arellano*⁴⁴, una vez fijado el criterio de interpretación y aplicación, debe ser incorporado por los Estados en su ordenamiento jurídico a través de todas las medidas necesarias, ya sean políticas, legislativas o sentencias que den eficacia a los pronunciamientos de la Corte⁴⁵.

Siguiendo lo consagrado en la referida opinión consultiva, es importante señalar que el 6 de febrero de 2020, por primera vez, en un caso contencioso, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional por violación a los derechos a un medio ambiente sano⁴⁶, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma

⁴¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Medio ambiente y derechos humanos*, cit.

⁴² *Ibid.*

⁴³ RANGEL AGÜEROS, J., “El Soft Law y la cosa interpretada como parte de procesos de creación normativa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, *Revista de Derecho*, vol. 40, n.º 1, 2019, p. 148. Sobre este punto véase también Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional*, Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014, Serie A, párr. 31, donde se aclara el deber de toda autoridad pública de ejercer un control de convencionalidad sobre la base de lo establecido también por la Corte IDH en virtud del ejercicio de su competencia consultiva.

⁴⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 154, Serie C de 26 de septiembre de 2006. Sobre este punto véase CASTAÑEDA, M., *El Derecho internacional de los derechos humanos y su recepción nacional*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, D. F., 2012, p. 209.

⁴⁵ BAZÁN, V., “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes nacionales: acerca del control de convencionalidad y la necesidad de un diálogo interjurisdiccional sustentable”, Ponencia dictada en el VII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional *Constituciones y Principios*, México, del 6 al 10 de diciembre del 2010, p. 8.

⁴⁶ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) contra Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 400, Serie C de 6 de febrero de 2020.

autónoma a partir del artículo 26 de la CADH⁴⁷, por las actividades lesivas cometidas en perjuicio de ciento treinta y dos comunidades indígenas que habitan en el Departamento Rivadavia, de la Provincia de Salta, República Argentina. La Corte consideró al respecto, que la tala ilegal de árboles, la ganadería e instalación de alambrados realizadas por la población criolla, el sobrepastoreo, la contaminación del agua con heces de animales, entre otras cosas, transformaron el paisaje, afectaron gravemente bienes ambientales, impactaron la fauna silvestre e incidieron en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas, en su acceso al agua, en su forma de vida y en su identidad cultural⁴⁸.

En esta sentencia se reitera lo establecido en la opinión consultiva núm. 23 relativo a que el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo protege la Naturaleza y sus componentes como intereses jurídicos en sí mismos y no solo por su utilidad para las personas. Se destaca la importancia de las obligaciones de prevención y restauración⁴⁹ y se expresa que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos como lo estipulan las reglas generales de interpretación descritas en el art. 29 de la CADH y en el art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados⁵⁰. Fundamentada en todo lo expuesto, la Corte IDH pudo también declarar la violación de los derechos de la Naturaleza en virtud del art. 26 de la CADH y ordenar medidas más concretas de restauración del daño causado a ésta, administrando así simultánea y armónicamente dos justicias, la ambiental para las personas y la ecológica para la Naturaleza.

Como ha planteado anteriormente la Corte “la interdependencia e indivisibilidad de los derechos reconocidos por la Convención Americana niega cualquier separación, categorización o jerarquía entre derechos para efectos de su respeto, protección y garantía. Esta condición atañe no sólo al reconocimiento de los DESCAs

⁴⁷ La posibilidad de justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (art. 26 de la CADH) fue admitida por primera vez en 2017 en un caso contencioso sobre el derecho al trabajo (Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Lagos del Campo contra Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 340, Serie C de 31 de agosto de 2017).

⁴⁸ Como medidas de reparación, en este caso la Corte IDH ordenó al Estado, entre otras: a) delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las comunidades indígenas sobre su territorio; b) remover del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y concretar el traslado de la población criolla fuera de ese territorio; c) abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena o que puedan afectarlo, sin consultar de manera previa, adecuada, libre e informada a las comunidades indígenas; d) presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación y formule y ejecute un plan de acción para atender esas situaciones; e) elaborar, un estudio en el que establezca acciones que deben instrumentarse para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación; f) garantizar el acceso permanente a agua potable; g) evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y culturalmente adecuada.

⁴⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) contra Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas*, cit.

⁵⁰ *Ibid.*, párr. 197.

como derechos humanos protegidos por el artículo 26, sino también a los aspectos de competencia de este Tribunal para conocer sobre violaciones a los mismos sobre la base de dicho artículo”⁵¹. Los elementos desarrollados en el marco de los derechos humanos y de los derechos ambientales se constituyen en fuentes de los derechos de la Naturaleza. Asimismo, el principio de interpretación evolutiva y de interdependencia e indivisibilidad de los derechos resultan fundamentales para entender la interdependencia entre derechos y entre sujetos de derechos⁵², incluida la Naturaleza.

4. CONCLUSIONES

La Corte IDH mantuvo una posición antropocéntrica con relación al medio ambiente hasta que dicta la sentencia OC-23/17. Hasta entonces protegió de manera indirecta el medio ambiente y los recursos naturales por la importancia y utilidad que estos representan para los seres humanos, como se observó en los casos relativos a la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas. A partir de la opinión consultiva núm. 23 de 2017 reconoce en la Naturaleza un valor intrínseco y establece que el derecho al medio ambiente es un derecho autónomo que se desprende del contenido del art. 26 de la CADH. En febrero de 2020 declara por primera vez violado de manera autónoma el derecho al medio ambiente y reitera que la Naturaleza posee un valor intrínseco que debe ser protegido. Estos avances por parte de la Corte IDH apuntan al desarrollo de un cambio de paradigma que busca proteger los derechos de la Naturaleza para asegurar con ello la supervivencia de las especies y de los ecosistemas, su integridad y la restauración de los ecosistemas a su situación original cuando resulten afectados, a través de la promoción de la solidaridad entre Estados, generaciones y especies.

Al impulsar el constitucionalismo latinoamericano una gran apertura al Derecho internacional de los derechos humanos, especialmente por el tratamiento dado a los tratados que versan sobre dicha materia, la incorporación de la figura del bloque de constitucionalidad y la práctica del control de convencionalidad, los aportes que realice la Corte IDH a la Jurisprudencia de la Tierra facilitarán la construcción inmediata de un *ius commune* en la región en materia de derechos fundamentales de la Naturaleza en armonía con los derechos de las personas al medio ambiente. Esto así, porque los operadores de justicia y cualquier autoridad pública tendrán que cotejar en cada caso concreto y en el ejercicio de sus funciones la compatibilidad de las normas internas con el Derecho internacional de los derechos humanos y, a la vez, cumplir con los mandatos normativos de los tratados. Al no lograr recomponerse la Naturaleza con las innovaciones biotecnológicas ni el Derecho ambiental resultar

⁵¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Cuscul Pivaral y otros contra Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 359, Serie C de 23 de agosto de 2018, párr. 86.

⁵² VALAREZO ROMÁN, J., CAMPOVERDE KAM, J. y JIMÉNEZ GONZÁLEZ, J., “Derecho ambiental y su vinculación con los derechos humanos, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, vol. 2, n.º 3, 2019, p. 28.

suficiente, el nuevo paradigma se convierte ciertamente en una condición imprescindible para garantizar la propia viabilidad de la especie humana en la Tierra y los derechos fundamentales de todos y todas.

BIBLIOGRAFÍA

- ANAYA, J., CASTAÑEDA, Y. y REYES, A., “El derecho al desarrollo y los derechos de la Naturaleza”, *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas* (UNIFAFIBE), vol. 8, n.º 2, 2020.
- BAUTISTA LÓPEZ, J., “Discriminación ambiental, la negación del principio de igualdad en el ejercicio del derecho al medio ambiente”, *Revista Argumentos*, n.º 8, 2019.
- BAZÁN, V., “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes nacionales: acerca del control de convencionalidad y la necesidad de un diálogo interjurisdiccional sustentable”, Ponencia dictada en el VII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional *Constituciones y Principios*, México, del 6 al 10 de diciembre del 2010.
- BEDÓN, R. y SUÁREZ, S., “Derechos de la Naturaleza en Ecuador y otras tendencias a nivel internacional”, *CÁLAMO Revista de Estudios Jurídicos*, n.º 11, 2019.
- BELLOSO MARTÍN, N., *El debate sobre la tutela institucional: Generaciones futuras y derechos de la Naturaleza*, Universidad de Alcalá-Defensor del Pueblo, Alcalá de Henares (Madrid), 2018.
- BERRY, T., *The dream of the Earth*, Sierra Club, San Francisco, 1988.
- CALDERÓN GAMBOA, J., “Medio ambiente frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Una ventana de protección”, en CANÇADO TRINDADE, A. y BARROS LEAL, C. (coords.), *Derechos humanos y Medio Ambiente*, Expressão Gráfica e Editora, Fortaleza, 2017.
- CASTAÑEDA, M., *El Derecho internacional de los derechos humanos y su recepción nacional*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, D. F., 2012.
- GONZÁLEZ BALLAR, R., “El Derecho ambiental del siglo XXI: Reflexiones para reformas necesarias”, en PEÑA CHACÓN, M. (ed.), *Derecho ambiental del siglo XXI*, ISOLMA, San José, 2019.
- GUZMÁN, J., “Decolonizing Law and Expanding Human Rights: Indigenous Conceptions and the Rights of Nature in Ecuador”. *Deusto Journal of Human Rights*, n.º 4, 2019.
- LLASAG FERNÁNDEZ, R., “Derechos de la naturaleza: una mirada desde la filosofía indígena y la Constitución”, en ESPINOSA GALLEGOS-ANDA, C. y PÉREZ FERNÁNDEZ, C. (eds.), *Los derechos de la Naturaleza y la naturaleza de sus derechos*, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Quito, 2011.
- MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamentos para el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos”, en ESTUPIÑAN ACHURY, L., STORINI, C., MARTÍNEZ DALMAU, R. y DE CARVALHO DANTAS, F. (ed.), *La naturaleza como sujeto de Derechos en el Constitucionalismo Democrático*, Universidad Libre, Bogotá, 2019.

- MARTÍNEZ, A. y PORCELLI, A., “Sistematización de las sentencias del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza en defensa del Ecosistema Natural”, *POSICIÓN*, n.º 3, 2020.
- MARTÍNEZ, E. y ACOSTA, A., “Los derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible”, *Revista Direito e Práxis*, vol. 08, n.º 4, 2017.
- MORATO LEITE, J. y FRANÇA DINNEBIER, F., “Derechos de la Naturaleza: Fundamentos y protección por el Estado ecológico de Derecho en América Latina”, en PEÑA CHACÓN, M. (ed.), *Derecho ambiental del siglo XXI*, ISOLMA, San José, 2019.
- NASH, R., *The Rights of Nature: A History of Environmental Ethics*, The University of Wisconsin Press, Madison, 1989.
- Organización de las Naciones Unidas, *Carta Mundial de la Naturaleza*, Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, Resolución 37/7, 28 de octubre de 1982.
- PASSMORE, J., *La responsabilidad del hombre frente a la naturaleza*, trad. de A. Delgado, Alianza Editorial, Madrid, 1990.
- RANGEL AGÜEROS, J., “El Soft Law y la cosa interpretada como parte de procesos de creación normativa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, *Revista de Derecho*, vol. 40, n.º 1, 2019.
- STONE, C., “¿Los árboles deberían tener legitimidad procesal? Hacia un reconocimiento de los derechos legales de los objetos naturales”, trad. de C. Morales, en HARDIN, G., ROSE, C. y STONE, C., *Derecho Ambiental y Justicia Social*, Siglo de Editores, Bogotá, 2009.
- STUTZIN, G., “Un imperativo ecológico: Reconocer los derechos de la Naturaleza”, *Ambiente y Desarrollo*, n.º 1, 1984.
- VALAREZO ROMÁN, J., CAMPOVERDE KAM, J. y JIMÉNEZ GONZÁLEZ, J., “Derecho ambiental y su vinculación con los derechos humanos, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, vol. 2, n.º 3, 2019.
- ZAFFARONI, E., “La naturaleza como persona: de la Pachamama a la Gaia”, en ESPINOSA GALLEGOS-ANDA, C. y PÉREZ FERNÁNDEZ, C. (eds.), *Los derechos de la Naturaleza y la naturaleza de sus derechos*, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Quito, 2011.
- *La Pachamama y el humano*, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2011.

RELACIÓN DE SENTENCIAS Y OPINIONES CONSULTIVAS

- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) contra Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 198, Serie C de 1 de julio de 2009.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 154, Serie C de 26 de septiembre de 2006.

- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros contra Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 304, Serie C de 8 de octubre de 2015.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa contra Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 125, Serie C de 17 de junio de 2005.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 146, Serie C de 29 de marzo de 2006.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek contra Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 214, Serie C de 24 de agosto de 2010.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) contra Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 400, Serie C de 6 de febrero de 2020.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Cuscul Pivaral y otros contra Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 359, Serie C de 23 de agosto de 2018.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 79, Serie C de 31 de agosto de 2001.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) contra Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 270, Serie C de 20 de noviembre de 2013.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso del Pueblo Saramaka contra Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 172, Serie C de 28 de noviembre de 2007.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Lagos del Campo contra Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 340, Serie C de 31 de agosto de 2017.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador. Fondo y Reparaciones*, Sentencia n.º 245, Serie C de 27 de junio de 2012.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Pueblos Kaliña y Lokono contra Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia n.º 309, Serie C de 25 de noviembre de 2015.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional*, Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014, Serie A.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Medio ambiente y derechos humanos*, Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, Serie A.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016, Serie A.